

## **Banco de España**

### **Informe del Banco de España ante la comisión parlamentaria que ha de dar dictamen sobre el Proyecto de Ley regulando las relaciones del Tesoro Público con el establecimiento / Banco de España**

Madrid : Banco de España, 1920

Signatura: D-26893

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente*





D 26893

## Informe del Banco de España ante la Comisión parlamentaria que ha de dar dictamen sobre el Proyecto de Ley regulando las relaciones del Tesoro público con el Establecimiento.

Sres. Diputados, Presidente y Vocales de la Comisión:

El Banco de España, estimando de suma conveniencia, más para los intereses generales del país que para la defensa de los suyos privados, el posible perfeccionamiento del Proyecto de Ley presentado al Congreso de los Diputados por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con fecha 26 del actual, tiene el honor de someter á la consideración de Sus Señorías ciertas observaciones, con la esperanza de que puedan ser de alguna utilidad en el estudio de los interesantes problemas suscitados una vez más ante el Poder legislativo y que tan directamente afectan al régimen económico de nuestra Patria.

Mas ante todo cumple al Banco de España hacer mérito de su sinceridad y buen deseo en el cumplimiento de la Ley de 1902; porque si bien no ha estado, ciertamente, en el ánimo del Sr. Ministro imputar al Banco un voluntario apartamiento de los preceptos legales ni el intento de dilatar la finalidad de aquella Ley orgánica, es lo cierto que el Preámbulo del Proyecto se presta por lo conciso de sus términos á que la opinión vulgar, interpretando torcidamente algún concepto, ponga en olvido los memorables servicios del Banco de España á la Nación y desconozca que la cláusula 7.<sup>a</sup> del Convenio de 17 de Julio de aquel año establece las reglas á que había de ajustarse la enajenación de valores, la cual en los últimos años no habría podido realizarse sin causar enorme lesión al crédito público.

Cumplió el Banco la Ley y secundó las elevadas miras del Legislador en cuanto dependió de su buena voluntad y acredítanlo los resultados obtenidos y que el Sr. Ministro se complace en reconocer, tanto en el robustecimiento de las existencias metálicas con aumento de 140 millones de pesetas en oro, como en la reducción de 800 millones de créditos contra el Estado y progreso de la Cartera mercantil en 352 millones de pesetas.

Á este propósito conviene tener presente que, hallándose España en 1898 oprimida por la imperiosa necesidad de agotar sus recursos en dos guerras coloniales y una internacional, suficientes á destruir la vitalidad de cualquier





Nación más poderosa, logró sin embargo merced en primer término al Banco de España, evitar de un lado el abismo del curso forzoso, sin caer del otro en la esclavitud del capitalismo extranjero, y aún pudo el Banco, con clara conciencia de su fuerza, arrostrar serenamente la enorme depreciación de los valores públicos, ya entonces garantía mezquina de una considerable parte de su Cartera, y contribuir así eficaz y poderosamente á la restauración del crédito público y de las fortunas individuales, prodigiosamente lograda antes de que terminase aquel año luctuoso.

Naciones de colosal poderío económico, en circunstancias análogas, no han conseguido nada semejante y ello demuestra que la situación de España y la robustez de su Banco nacional eran factores de nuestro problema económico no bien estudiados por los economistas extranjeros, cuyos augurios de nuestra ruina quedaron desmentidos por el hecho inesperado para ellos de nuestra solvencia nacional. Ciertamente que á raíz de consumarse ese verdadero prodigio económico tan inexplicable para los economistas que recordaban el curso forzoso de Francia, Austria é Italia en la última mitad del siglo XIX, el Banco de España concentraba en sí la casi totalidad de las Deudas no consolidadas del Estado y que esta situación, unida al desnivel de los cambios extranjeros, exigía reformas paulatinas que orientasen el porvenir hacia la normalidad, y con esta mira la Ley de 1902 estableció principios tal vez demasiado absolutos; pero justificados por las circunstancias, y hay que reconocer que en cuanto su aplicación no pugnó con la realidad derivada de la evolución de los hechos económicos, dichos principios han tenido un benéfico influjo en el desarrollo de la riqueza, en el restablecimiento de nuestro crédito internacional y en la regularidad de la circulación fiduciaria.

Mas hace tiempo que los economistas de todas las escuelas y los hacendistas de todos los partidos reconocen la pugna entre el total cumplimiento de aquella Ley y el interés público; porque todo el mundo conviene en que al Banco de España como á cualquier Banco nacional y único de emisión de la índole del nuestro, más bien que prohibírsele la posesión de Deuda perpetua en su Cartera debiera imponérsele como precepto; como ocurre en las naciones más prósperas y adelantadas; por cuanto á ninguna garantía efectiva debe el Estado atribuir mayor valor, ni solvencia más estable, que á su propio signo de crédito.

Justificado está pues que este Proyecto de ley como otros que en los últimos años le sirven de precedente reconozca la posibilidad de que el Banco de España solo enajene su cartera de valores públicos teniendo en cuenta las circunstancias del mercado y su propia conveniencia; mas á trueque de este reconocimiento es harto sensible que poniéndose en olvido el carácter convencional de las Leyes orgánicas del Banco de España se impongan á este sin previa invitación ni concierto enormes sacrificios, injustos como compensación si se recuerda que en 1891 ya fué dada la compensación con largueza y en 1899 se declaró que quedaban compensados en toda su extensión los beneficios que de la Ley de 1891 pudiera reportar el Banco; y más injustos como castigo porque se opone evidentemente á la justicia, que el Estado imponga pena por la conservación de valores públicos estando él más interesado que el mismo Banco en que no se enajenen, y persuadido de que habría de prohibirle la enajenación si la intentara.

Con esta observación cree el Banco llamar la atención debidamente sobre el artículo 9.º del Proyecto de Ley, que sin duda alguna constituye la principal mira de su ilustre autor y que lesiona por varios gravísimos con-



ceptos al Banco de España, sujeto ahora como todos los tenedores de la Deuda pública al impuesto del 20 por 100 de la renta que produce; sujeto después al impuesto de utilidades establecido sobre este y todos sus beneficios bancarios y amenazado por el Proyecto de Ley con un nuevo gravámen que comenzaría por ser del 15 por 100 y acabaría siendo del 25 por 100 dentro de pocos años.

No se ha ponderado hasta ahora debidamente la participación que por innumerables conceptos goza el Estado en las operaciones del Banco de España y no sería fácil graduarla con exactitud si se atiende á los múltiples impuestos de Timbre, Derechos reales, Utilidades, Contribución territorial é industrial en que cada operación respectiva ó simultáneamente incurre: por todo ello el Fisco obtiene enormes rendimientos que dificultan notoriamente la circulación de la riqueza y el uso del crédito; mas aparte de todo es lo cierto que la aplicación del activo del Banco que se aproxima á 2.700 millones de pesetas produce anualmente poco más de 35 millones, y de ellos el Estado obtiene para sí, solo por impuesto de utilidades sobre los beneficios y sobre los dividendos y por timbre de circulación de acciones, más de 8 millones de pesetas ó sea con bastante exceso la quinta parte de los beneficios líquidos de tan enorme suma de capitales; y si á tal cuota se suman los 6 millones, natural interés de los 150 anticipados en 1891, resulta que repartiéndose 27 millones para dar á las acciones un dividendo de 4'20 por 100 anual, el Estado percibe 14 millones. La trascendencia de ese proyectado artículo 9.º, supera por tanto á la de todas las modificaciones unilaterales que hasta ahora ha sufrido el Banco de España en sus pactos bilaterales con el Estado, y es bien sensible que para ello no se haya observado el reciente ejemplo de Francia cuyo poder legislativo no estimó que hacía dejación alguna de su soberanía votando una ley reducida á aprobar dos convenios libre, moderada y prudentemente estipulados entre el Ministro de Hacienda y la representación del Banco de Francia.

Aparte de esta capital observación, otros artículos del Proyecto merecen algunas de notoria importancia.

El último párrafo del art. 5.º ha de crear seguramente en lo porvenir, de llegar á ser ley, gravísimas dificultades derivadas de la abierta oposición en que está con el párrafo anterior. Nótese bien que el párrafo penúltimo autoriza la circulación de dos emisiones sucesivas de billetes que sean las últimas ó más recientes de cada serie; y siendo así que cualquiera emisión puede tardar más de siete años en adquirir la circulación plena, dicho está que en la generalidad de los casos al utilizar el Banco el derecho que le confiere el párrafo 2.º del art. 5.º habrá de conculcar necesariamente lo dispuesto en el párrafo 3.º.

Un ejemplo del todo ajustado á la realidad aclarará esta observación. Supóngase que el Banco de España empieza á fabricar una emisión de la Serie de 100 pesetas en 1906 y que considerándola bastante perfecta y resistente á los intentos de los falsificadores, la fabricación se continúa mediante sucesivas estampaciones hasta 1912: claro es que no toda la emisión circula simultáneamente porque los billetes entregados al público en 1906 hace ya mucho tiempo que si realmente circularon han tenido que ser retirados de la circulación por viejos, amortizados y quemados, y en cambio los de la misma emisión fabricados en 1912, todavía, aunque llevan estampada la fecha de 1906, no han sido entregados al público.

Como se vé, estos billetes el año que viene tendrán siete de fecha y





según el último párrafo del art. 5.º deberán ser retirados de la circulación estén nuevos ó viejos, y sin embargo según el párrafo 2.º el Banco tendrá derecho á utilizar sucesivas estampaciones de esa misma serie indefinidamente y aún después de poner en curso otra emisión posterior que crea le ofrece mejores garantías.

Puede creerse que el autor del proyectado precepto, al hablar de emisión, ha supuesto que toda ella instantáneamente entraba en circulación en determinada fecha, cosa imposible; ó que lo que quiere dar á entender es que se impida la circulación de cualquier billete por más de siete años, cosa inútil; porque si los billetes yacen escondidos, pueden permanecer nuevos y no bastará la voluntad del Banco para atraerlos á sus cajas, y si realmente circulan, mucho antes de siete y aún de cinco años estarán por viejos amortizados y quemados.

Por otra parte, es cosa sabida que todos los Bancos aspiran á conservar estables y sin variación sus tipos de billetes por 20 ó más años, mientras los adelantos de la industria legítima ó de la fraudulenta no convencen de la necesidad de variarlos. A ello se ha atendido también en España y en ésto coinciden los esfuerzos del Banco y los deseos de todos los ciudadanos; y cuando á costa de grandes sacrificios se ha conseguido desde 1906 hasta ahora una estabilidad antes no lograda, el último párrafo del art. 5.º parece disponer la renovación periódica de que antes se quejaba todo el mundo cuando alguna falsificación peligrosa obligaba á cambiar con frecuencia las series circulantes. Conviene pues que ese párrafo se modifique en el sentido de exigir que las cajas del Banco solo entreguen al público billetes que se hallen en perfecto estado de conservación; porque eso sin duda alguna es lo que razonablemente puede desearse y no otra cosa, y porque la letra del artículo se presta á una interpretación rayana en lo absurdo.

Los inconvenientes de la actual redacción del art. 6.º no es necesario encarecerlos. Legislar *á priori* que cada trienio habrán de establecerse cuatro ó más dependencias del Banco, Sucursales ó Cajas, es una previsión que no puede fundarse en el estudio de las necesidades públicas; porque en un trienio puede convenir el establecimiento de 6 dependencias y en otro trienio no ofrecerse ocasión razonable de establecer ninguna.

El principal interesado en establecer Sucursales y Cajas subalternas es el Banco de España. La certeza de esta afirmación pudo ponerse en duda, duda nunca fundada en la conducta del Banco, cuando éste, por las circunstancias de la Nación, tenía principalmente consagrada su actividad y aplicadas sus fuerzas económicas á satisfacer las necesidades del Estado y á mantener el crédito de los valores públicos mediante cuantiosas pignoraciones; mas ahora que el Banco está dispuesto á difundir los beneficios del crédito todo lo que sus fuerzas consientan y que realiza multitud de funciones de interés general con nulas ó escasísimas ganancias en millares de poblaciones por medio del ya organizado servicio de corresponsales, ¿qué demostración requiere la afirmación antes expuesta? Légsese en buenhora que el Banco establezca un determinado y prudente número de dependencias: siempre ello será más ó menos caprichoso; pero al fin puede fundarse en un criterio aceptable; mas descender á particularizar todo lo que el art. 6.º determina, de hecho creará al Banco serias dificultades y podrá dar ocasión á errores de suma transcendencia en la forzada y perentoria elección de plazas bancables.

El art. 11.º reconoce para el cómputo como reserva legal el oro que el



Banco tenga en poder de sus corresponsales en el Extranjero, pero sólo hasta el límite máximo de la suma que figure en el balance del Banco al comenzar el año actual. La razón de esto no se expresa.

Los créditos por cantidades en oro existentes también en el Extranjero y exigibles á la vista, podrán igualmente computarse por la cantidad que aparecía en la misma fecha; pero tampoco de este límite se explica la razón.

Y al Banco no se le alcanza cual pueda ser; por que tanto el oro amonedado como los créditos por cantidades en oro á la vista han desempeñado siempre en el Extranjero servicios importantísimos para el crédito y la solvencia de la Nación Española; y de hecho, en cantidad conveniente y con todas las seguridades apetecibles, ofrecerán ventajas muy superiores á las que pueda ofrecer el depósito de oro en las cajas subterráneas del Banco de España. No es posible que el Estado desconozca esas ventajas por que él es principalmente quien las ha obtenido, y de su parte pudiera no ser prudente señalar el límite actual á esas estimabilísimas existencias de oro, perfectamente garantizadas, allí donde pueden prestar servicios superiores á cualquier previsión.

Por otra parte, respecto de los créditos en oro á la vista el Proyecto vá mucho más allá; por cuanto obliga al Banco á cancelarlos por terceras partes en tres años, anuncio que conocido con anticipación y á plazo fijo, podrá tal vez producir alguna sensación en el cambio extranjero cuando lleguen las ocasiones de cancelar los créditos por terceras partes.

De todo lo cual se deduce que el espíritu del art. 11.º del Proyecto es estimar solo tolerable y digna de limitación y de reducción la existencia de oro y de disponibilidades de oro á la vista cuando estan garantizadas por dos solvencias, la del Banco extranjero que materialmente las tiene y la del Banco de España que responde de ellas: y preferible la sola responsabilidad del Banco de España mediante la inactiva permanencia de las monedas en sus sótanos. Hasta qué punto pueda ser inconveniente lo absoluto de ese criterio no requiere más detenido exámen.

En suma, el Proyecto de que se trata, laudable por su orientación á consentir que parte de la Cartera del Banco permanezca invertida en el principal signo del crédito del Estado; susceptible de modificaciones absolutamente indispensables en tal ó cual párrafo que de prosperar en la redacción actual, conducirían á conflictos de evidente trascendencia; bien intencionado como etapa final de la reforma con tanto éxito promovida por su ilustre autor en 1902; ofrece sin embargo dos reparos sustanciales, de los que uno dice relación á la forma y procedimiento y el otro al fondo y finalidad de la medida legislativa.

Respecto del primero sea lícito al Banco de España recordar que después de los inestimables servicios prestados á la Patria, servicios no superados en eficacia y desinterés por ningún otro Banco en relación con sus Estados respectivos, aún sigue en período constituyente, supuesto que en diez años se ha intentado cinco veces alterar su régimen y aun se anuncia en este Proyecto la posible necesidad de otra Ley para dentro de cinco años y lógico sea suponer que antes de ocho sea imperioso legislar sobre la renovación del privilegio. Una institución financiera y mercantil cuyo crédito resiste á esa fluctuante inestabilidad es sin duda el más sólido cimiento para la restauración económica de España y merece ciertamente que de una vez sea estudiada su organización, perfeccionado su funcionamiento, respetada su personalidad jurídica, consolidado su legítimo interés y sancionado su derecho, por lo que en sí tienen de intangibles la personalidad, el in-



terés legítimo y el derecho perfecto; pero más que nada por la propia conveniencia del crédito y de la pública utilidad. Trátese de legislar pronto y con las elevadas miras del Sr. Ministro de Hacienda en orden á la definitiva constitución del Banco de España como primera potencia de un venturoso porvenir económico, y el Banco de España se apresurará á patentizar una vez mas su patriotismo, su abnegación y su íntimo deseo de contribuir á la grandeza de la Patria.

El segundo reparo que ofrece el actual transitorio Proyecto hemos dicho que se refiere á su finalidad, y es lo cierto que aquel sacrificio enorme que al principio se atrevió el Banco á calificar de injusto, ora se le considerase compensación, ora castigo por la inevitable conservación de la Deuda perpetua, carece absolutamente de finalidad; supuesto que el Proyecto, apartándose del ejemplo que otras Naciones nos dan, omite explicar la aplicación que los millones obtenidos del Banco por este singularísimo arbitrio tendrán en el régimen financiero del Estado. Dispusiera el Proyecto que esos millones habrían de destinarse á reforzar la existencia de oro, y el Banco de España realizaría con gusto su sacrificio contribuyendo con él á una obra de interés nacional, ya que todos los economistas y la opinión general están persuadidos de que el medio mejor de robustecer el crédito de la Nación y el del propio Banco es el aumento constante de nuestra existencia de oro, para ir en lo posible preparando su ansiada circulación cuando el cambio extranjero lo permita. Acerca de este punto, el Consejo de gobierno del Banco desea insistir y espera que la ilustrada Comisión, de opinar que procede imponer al Banco un gravámen por la conservación de su Cartera de Deuda pública, ha de reconocer que es más justo, más equitativo y más conveniente á los intereses generales del país aplicar íntegro el importe de aquél á la adquisición de oro y no á robustecer los ingresos de la Hacienda

De todo lo expuesto se deducen las siguientes principales conclusiones:

1.<sup>a</sup> Que el último párrafo del art. 5.<sup>o</sup> debe sustituirse por otro en que se obligue al Banco á no entregar al público billetes que no estén en buen estado de conservación.

2.<sup>a</sup> Que por el art. 6.<sup>o</sup> se obligue al Banco indeterminadamente á crear cierto número de Sucursales ó Cajas subalternas, por ejemplo cuatro dentro del primer trienio, sin perjuicio de que en todo caso cuide de favorecer al Comercio, la Industria y la Agricultura con la difusión del crédito.

3.<sup>a</sup> Que para el cómputo de la reserva legal en oro á que se refiere el artículo 11.<sup>o</sup> se admita el que de su propiedad tenga ó pueda tener el Banco en poder de sus corresponsales extranjeros, siempre que ostente la condición de disponible á la vista.

4.<sup>a</sup> Que de establecerse un gravámen por la conservación de la Cartera de valores, se aplique necesariamente por el Banco á la adquisición de oro, sin fijar plazos para ello á fin de no influir en el mercado ni contribuir á la elevación de los cambios, y prohibiendo al Establecimiento que dé á dicho fondo ninguna otra aplicación.

El Banco de España termina con ésto la sumaria exposición de sus observaciones, y protestando una vez más de que ante todo y sobre todo desea que esta reforma y cualquier otra tienda á realizar la verdadera conveniencia pública, se felicitará de que su recta intención sea reconocida por los señores Diputados, individuos de la Comisión dictaminadora, y de que estas sobrias observaciones contribuyan de algún modo á mejorar el Proyecto de Ley según positivamente desean de consuno el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y el Banco de España.







